



UNIÓN INTERPARLAMENTARIA

126^a Asamblea y reuniones conexas

Kampala (Uganda), 31 de marzo - 5 de abril de 2012



Servicio de traducción al español – GRULAC – Unión Interparlamentaria
Versión original: inglés y francés – Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd
www.secretariagrulacuip.org

Primera Comisión Permanente
Paz y Seguridad Internacional

C-I/126/R
15 de diciembre de 2011

PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE LA BUENA GOBERNANZA COMO MEDIO DE FAVORECER LA PAZ Y LA SEGURIDAD: SACAR ENSEÑANZAS DE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN EL MEDIO ORIENTE Y EN EL NORTE DE ÁFRICA

***Informe presentado por los co-Relatores
Sr. M. Gyöngyösi (Hungría) y Sr. J. Mwiimbu (Zambia)***

Introducción

El año 2011 ha visto profundos cambios en la región del Medio Oriente y en el Norte de África. Los levantamientos en Túnez, Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria – comúnmente llamados la “Primavera Árabe” – anuncian la llegada de un nuevo orden regional. Estos parecen restaurar la autoestima y en alguna medida el sentimiento de comunidad de naciones árabes. Estos levantamientos permitieron denunciar las dictaduras, porque los “súbditos” de antes se convirtieron en ciudadanos, levantándose contra la opresión moral, religiosa e institucional.

De igual manera, estos acontecimientos han permitido a los Estados redefinirse en este nuevo orden. La instauración de una verdadera sociedad democrática hace de estos Estados ejemplos para la región y el conjunto del mundo árabe y los hace ganar un reconocimiento innegable.

Para numerosas personas la adopción e implementación de los principios fundamentales de la democracia son una condición previa a la promoción y la práctica de la buena gobernanza. Además, son consideradas como condiciones necesarias de un Estado constitucional: una Constitución reconocida por la mayoría, de donde se deriva un marco jurídico que regula las instituciones, las prácticas y los procedimientos; la organización de elección transparentes, libres y regulares, donde los partidos políticos compiten para asegurar la representación política de los

ciudadanos; y un sistema de poderes y de contra poderes. Normalmente, estas diferentes condiciones permiten dar una base institucional al poder político. Por último, para que la buena gobernanza contribuya a la paz y a la seguridad, es necesario que las instituciones políticas, económicas y sociales establecidas en ese marco, así como todos los recursos nacionales, sean utilizados para beneficio de los ciudadanos y sirvan al interés nacional.

El presente informe trata en primer lugar, desde el punto de vista teórico, de lo que la buena gobernanza aporta a la paz y la seguridad en el seno de la sociedad. Posteriormente, basándonos en un examen del contexto y de las causas de los levantamientos que se han producido en el Norte de África y en el Medio Oriente, nos esforzaremos por sacar enseñanzas de estos acontecimientos.

¿Qué es la buena gobernanza?

La buena gobernanza es una noción muy vasta utilizada generalmente en el área del desarrollo para describir la manera en que las instituciones conducen los asuntos públicos y gestionan los recursos nacionales para garantizar los derechos humanos en una sociedad. Por “gobernanza”, denominamos el proceso de toma de decisiones y de implementación de estas últimas en toda una serie de áreas, de manera que hablamos de gobernanza de empresa, o gobernanza local, nacional e internacional.

En el contexto político utilizamos con frecuencia la noción de buena gobernanza para distinguir las instituciones y ambientes políticos o económicos ineficientes de los que funcionan. Considerando que en las últimas décadas los gobiernos más “exitosos” han sido aquellos Estados democráticos liberales, que se encuentran mayoritariamente en el mundo occidental, existe generalmente la tendencia a tomar las instituciones de estos países como referencia para juzgar a las de otros países. En este sentido, se podría reprochar a este modelo de no tomar en cuenta las diferencias históricas, sociales y culturales, dando así lugar a las comparaciones simplistas. En la medida en que los gobiernos piensan o pretenden todos aplicar el principio de buena gobernanza, las diferencias culturales podrían contradecir las normas establecidas por la comunidad internacional. Actualmente, con el declive relativo de Occidente en el plano político, económico y social, cuyos valores y normas son fuertemente criticados por los ciudadanos¹, conviene aportar una mirada crítica sobre los criterios subjetivos definidos por las instituciones

¹ Las protestas “Occupy Wall Street” en los Estados Unidos, que se han extendido a Europa, así como las protestas organizadas en toda Europa para denunciar la mala administración económica y la falta de rendición de cuentas política, culminando en una crisis social, demuestran el mal funcionamiento de las instituciones económicas, políticas y sociales de Occidente.

occidentales. De ahí la idea que la noción de buena gobernanza debería ser definida donde esta se va a aplicar, menos preconcebida y basada en el interés de las naciones, teniendo en cuenta las diferencias históricas, sociales y culturales entre ellas.

Numerosas instituciones internacionales han dado su propia definición de buena gobernanza. Sin embargo, todas las definiciones concuerdan en un punto, a saber, que la buena gobernanza se refiere a la manera en que el poder es ejercido. Para el Banco Mundial, la buena gobernanza se refiere a la manera en que el poder es ejercido en la gestión de los recursos económicos y sociales de un país, y distingue tres elementos: i) el tipo de régimen político; ii) el mecanismo según el cual el poder es ejercido en la gestión de los recursos económicos y sociales para los fines del desarrollo; y iii) la capacidad de los gobiernos para definir las políticas y aplicarlas, así como también para cumplir sus funciones.

Por su parte, el PNUD define la buena gobernanza, entre otras, como participativa, transparente y que rinde cuentas. El PNUD piensa también que esta debe ser efectiva y equitativa, y favorecer el estado de derecho. La buena gobernanza garantiza que las prioridades políticas, económicas y sociales estén basadas en un amplio consenso en la sociedad y que las voces de los más pobres y más vulnerables sean escuchadas en las decisiones relativas a la distribución de los recursos afectados al desarrollo.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la noción de gobernanza se refiere al ejercicio de la autoridad política y del control en la sociedad, de la gestión de los recursos desde una óptica de desarrollo económico y social. Esta definición, relativamente amplia, engloba el rol de las autoridades públicas para definir el marco en el que trabajan los agentes económicos y determinar la distribución de los beneficios, así como la naturaleza de la relación entre gobernantes y gobernados. Por último, el Ministerio Británico de Desarrollo Internacional (DFID) parte del mismo principio que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, que distingue tres elementos primordiales en la gobernanza:

- Legitimidad del gobierno (regímenes políticos);
- Transparencia de los elementos políticos y oficiales del gobierno (administración pública y sistemas financieros); y
- Aptitud de los gobiernos para elaborar políticas y asegurar los servicios (administración pública y sistemas económicos, más fortalecimiento estructural).

En suma, la buena gobernanza puede ser entendida como una gobernanza en adecuación con las necesidades de los ciudadanos, como sigue:

- i) Responsabilidad y transparencia;
- ii) Aptitud para gestionar el desarrollo;
- iii) Facilidad de acceso a la información;
- iv) Amplia participación del público en los procesos políticos, sociales y económicos;
- v) Buen sistema de suministro de bienes y servicios;
- vi) Respeto del estado de derecho; y
- vii) Elecciones libres y regulares.

Por tanto, se puede decir que la gobernanza concierne a la manera en que el poder cumple las responsabilidades que le han sido confiadas por elección, nominación o delegación, en el área pública o en la de la empresa. En el mismo orden de ideas, la buena gobernanza se entiende por una situación en la que las obligaciones son cumplidas de manera efectiva, transparente y se rinde cuentas, mientras que, por oposición, la mala gobernanza se refiere a una mala administración. Esta supone la existencia de instituciones eficaces y que rinden cuenta, esto es, de reglas políticas, judiciales, administrativas, económicas y empresariales sólidamente establecidas, que favorecen el desarrollo, protegen los derechos humanos, hacen reinar el estado de derecho y garantizan a los ciudadanos el poder participar en las decisiones que afectan su vida.

La buena gobernanza como medio de promover la paz y la seguridad

Existe una correlación probada entre la buena gobernanza y la realización de la paz y seguridad. La seguridad, en su acepción general, está basada en tres elementos: la seguridad en su sentido tradicional, que reposa en la eficacia del Estado, pero también la seguridad de los ciudadanos que se deriva del desarrollo económico y de la buena gobernanza, y por último, el estado de derecho. Son estos tres principios, en su conjunto, que determinan efectivamente la paz y la seguridad. En otras palabras, la ausencia de buena gobernanza constituye una amenaza para la paz y la seguridad.

Además, la seguridad y la buena gobernanza son indisociables en el sentido que la buena gobernanza ayuda a prevenir los conflictos y así a asegurar la paz. Se puede decir que los ciudadanos que se sienten libres y en seguridad, que tienen el sentimiento de ser dirigidos por un estado de derecho y no por hombres, son mucho menos propensos que los demás a hacer la guerra, ya sea al interior de las fronteras nacionales como con otros Estados.

En suma, las mejoras relativas a la buena gobernanza tienen un vínculo estrecho con la seguridad y la estabilidad. Si los objetivos de la buena gobernanza

consisten en consolidar las estructuras políticas y en crear instituciones democráticas legítimas, tales como la promoción de la constitucionalidad, la repartición del poder, el respeto de los derechos humanos y un marco jurídico bien definido para desarrollar el sector privado y luchar contra la corrupción, sin duda, la realización de la gobernanza engendraría la paz.

A la inversa, la inseguridad y las situaciones de conflicto son el fruto de una violencia que tiene su origen en la inestabilidad política y social. Si la inestabilidad y la violencia tienen repercusiones sobre la buena gobernanza, lo contrario es igualmente verdadero, a saber, que la ausencia de buena gobernanza engendra la violencia y alimenta así la inestabilidad y la inseguridad. Se puede resumir este principio como sigue: la buena gobernanza que consiste en una buena administración de los asuntos públicos conduce, a la larga, a la estabilidad y la seguridad, y viceversa.

A nivel internacional, la seguridad necesita un partenariado mundial. Las iniciativas, como la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en 2000, durante la Cumbre del Milenio de la ONU, por los 189 Estados Miembros de la Organización, contribuyen a la paz y la seguridad en el mundo, favoreciendo la buena gobernanza. La Declaración del Milenio llama a defender la paz, la seguridad y los derechos humanos, a eliminar el hambre y la pobreza, y recuerda el derecho a la educación y su importancia desde una óptica de desarrollo sustentable. Esta recuerda también que la paz y la seguridad son indispensables para la buena gobernanza y parte integrante, tanto a nivel local como a escala mundial.

Contexto de los levantamiento del Medio Oriente y del Norte de África

Los levantamientos ocurridos en el marco de la Primavera Árabe fueron provocados por protestas que comenzaron en Túnez el 18 de diciembre de 2010, seguido del acto trágico de Mohamed Bouazizi, que se inmoló para denunciar la corrupción, la brutalidad y el abuso de la policía. La “Revolución del Jazmín”, realizada en Túnez, condujo al derrocamiento del Presidente Zine al-Abidine Ben Ali, el 14 de enero de 2011.

Poco después de la caída del Presidente Ben Ali, una serie de protestas comenzaron en El Cairo, Egipto, para obtener la renuncia del Presidente Hosni Mubarak, que finalmente fue derrocado el 11 de febrero, después de 30 años en el poder. Los acontecimientos de Túnez y Egipto jugaron un papel importante en la ola de levantamientos en cadena en el Norte de África y en el Medio Oriente, con toda una serie de revueltas en Argelia, Jordania, Yemen, Bahréin y Siria.

En el caso de Libia, el levantamiento contra Muammar al-Gaddafi resultó pura y simplemente en una guerra civil, con una batalla feroz y prolongada entre las fuerzas de Gaddafi controlando la parte occidental del país y los rebeldes dominando el este. El 5 de marzo de 2011 los rebeldes fundaron el Consejo Nacional de Transición (CNT) en Benghazi, su bastión en el noreste de Libia. Después de la intervención de la OTAN, así como de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, autorizando un bloqueo aéreo completo de Libia para proteger a los civiles, el 22 de agosto los rebeldes habían invadido Trípoli y derrocado a Gaddafi, después de 41 años en el poder.

Causas de estas insurrecciones

Entre las causas numerosas y complejas para el origen de estos levantamientos, hay un evento particular: la inmolación, el 17 de diciembre de 2010, en Túnez, de Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante tunecino de frutas y legumbres, cuyo carro móvil fue confiscado por la policía porque no poseía un permiso de venta. En Túnez y Egipto, la causa principal de las revueltas se encuentra en la desilusión económica y social de la población, y en particular de los jóvenes. Los manifestantes demandaban inicialmente una reforma de la economía, más empleos y el fin de la corrupción. El alto porcentaje de jóvenes entre los desempleados es notable, particularmente en el Norte de África, donde estos representan cerca del 70% del total de la población². Si se considera que de una población de 83 millones de habitantes, en Egipto, la mayoría de las personas viven con menos de U\$S 4 por día, que aproximadamente 20 millones viven con menos de U\$S 2 y otros 20 millones ganan unos U\$S 2 por día, se puede fácilmente entender el alcance de la frustración que fue causada por las reformas económicas³ introducidas en respuesta a la crisis financiera de 2008-2009. Sin embargo, se debe notar que las reformas que apuntaban a liberalizar las economías de África del Norte en 2003 ya habían causado mucha tensión social, y que la crisis financiera solamente exacerbó el problema. Por último, el alza de los precios de los productos alimenticios⁴ en el mundo solamente se añadió al sufrimiento de la población.

Estos levantamientos tienen una característica particular. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han jugado, en efecto, un rol capital en la difusión

² Por ejemplo, en Argelia, el 90% de los desempleados tienen menos de 35 años. Mientras que en Egipto, el 87% de los desempleados tienen entre 15 y 29 años.

³ Las reformas económicas incluyeron una reducción radical de las subvenciones públicas sobre los bienes esenciales tales como la gasolina, la electricidad y el pan.

⁴ Basado en las estadísticas del Programa Alimentario Mundial, entre 2003 y 2011, el precio de la carne aumentó un 70%, el precio de la leche se multiplicó por 2.3, el precio de los cereales por 2,5, el precio del aceite y de las materias grasas por 2,8 y el del azúcar por 4,2.

de la información y en la organización de las protestas por parte de los jóvenes desilusionados y económicamente carenciados y una sociedad civil sofocada. Las TIC han jugado un rol esencial, en primer lugar, en la manera de tratar las cuestiones locales y nacionales, y además, porque estas han permitido esquivar los medios tradicionales que son objeto de una censura masiva. Además, numerosos jóvenes iniciados en Internet de estos países han hecho sus estudios en el extranjero, donde los autócratas y las monarquías absolutas son percibidos como anacronismos. Estos jóvenes, que han estudiado en Occidente, han experimentado los beneficios del sistema democrático y pueden compararlo con la realidad en su país. Por tanto, el deseo de la juventud de un cambio del régimen dictatorial y el establecimiento de un sistema democrático ha sido mostrado en los levantamientos.

Algunos analistas señalan que los países en cuestión - aparte de Yemen - no se encuentran entre los más pobres del mundo. Por tanto, la elite política podría haber detenido o al menos desacelerado el empobrecimiento de las masas, distribuyendo la riqueza nacional más equitativamente, aún tomando en cuenta la explosión demográfica en esos países. Este punto es demostrado mejor por las medidas tomadas por los Estados más prósperos de la región, en respuesta a la secuencia de eventos en Túnez, Egipto y Libia. El Emir de Kuwait declaró, por ejemplo, que se les otorgaría a todos los ciudadanos una suma de U\$S 3.599 hasta marzo de 2012, y los productos alimenticios fueron distribuidos gratuitamente. De manera similar, el Rey de Arabia Saudita anunció que gastaría 35 mil millones de dólares de las reservas del Reino para cubrir las prestaciones sociales. Gaddafi, antes de estallar la guerra civil, también recurrió a la distribución de dinero.

Aparte de las demandas sociales y económicas, también había motivaciones políticas detrás de las revueltas populares y los levantamientos. Los manifestantes demandaron principalmente el fin de los regímenes autoritarios y la renuncia de los líderes que hacía mucho tiempo estaban en el poder (Ben Ali, Mubarak y Gaddafi). Pero ellos también demandaron el llamado a elecciones libres y regulares y la eliminación de la censura y las barreras al goce de los derechos humanos. Se debe notar que aunque se habían realizado elecciones en Egipto en noviembre de 2010, la gran mayoría de la población ya estaba muy descontenta con los resultados, denunciando particularmente los fraudes y una ley electoral injusta. Por tanto, las demandas políticas fueron muy pronunciadas desde el mismo comienzo del levantamiento egipcio. Sin embargo, en Libia, debido a la complejidad de las relaciones tribales en la sociedad libia, así como las estructuras inestables del sistema político, las demandas políticas de la oposición de Gaddafi están menos claramente articuladas y permanecen ampliamente vagas. Bahrein constituye un caso separado y único. Las protestas se centraron en divisiones históricas, en el

hecho que la población de mayoría chiita es gobernada desde hace décadas por la minoría sunita.

Varios países de la región también trataron de evitar las revueltas populares, recurriendo a maniobras políticas. Como resultado de los eventos en Túnez y Egipto, el Presidente de Yemen - en poder desde hace 30 años - anunció el 2 de febrero que ni él ni su hijo tenían intención de postularse para la reelección en 2013. El 22 de febrero, el Gobierno de Argelia levantó el estado de emergencia introducido en 1992, y en febrero el Rey de Jordania prometió numerosas reformas. El 10 de marzo, el Rey de Marruecos introdujo una amplia reforma constitucional. Estos son unos pocos ejemplos de las medidas políticas tomadas a título preventivo en la región.

Otra causa de las sublevaciones en la región del Medio Oriente tiene que ver con la posición geopolítica o geoestratégica de los países involucrados. Aunque esto es una causa indirecta, es importante notar que una característica común de las sublevaciones fue un cierto grado de sentimiento anti-occidental. Algunos analistas sostienen que la causa de esto yace en el apoyo ciego de occidente a los regímenes autoritarios de la región, que oprimían a su pueblo y servían de buena voluntad a los intereses occidentales.

La "Revolución del Jazmín" en Túnez tuvo lugar en un país que jugó un rol estratégico desde la perspectiva de la Unión Europea. Túnez fue considerado por la UE como parte de una zona parachoques en un momento en que el Islam radical estaba en alza. Este rol, así como la cooperación económica, permitió que Ben Ali se mantuviera en el poder, y permitió que la UE hiciera la vista gorda a la falta de democracia en Túnez. Aparte del petróleo, Libia tenía un rol similar, y también ayudó a la UE, en particular a Italia, a contener los flujos de inmigrantes africanos. Sin embargo, ni Túnez ni Libia - contrariamente a Egipto - nunca había tenido un rol de importancia estratégica desde la perspectiva de los Estados Unidos o de la seguridad de Israel.

Durante las últimas tres décadas, la comunidad internacional ha considerado a Egipto como un aliado de Estados Unidos, entre ellas porque este firmó el tratado de paz Egipto-Israel en 1979. La importancia estratégica de Egipto puede ser demostrada por el volumen de ayuda externa que este recibió de Estados Unidos. Entre 2001 y 2010, los Estados Unidos otorgaron más de un tercio de toda su ayuda externa a Egipto e Israel. En 2010 solamente, Egipto recibió más de U\$S 1.5 mil millones de ayuda proveniente de Washington, 1.3 mil millones de los cuales tomaron la forma de ayuda militar, y solamente 250 millones de ayuda económica.

El régimen Mubarak cooperó con Israel durante años, aún compartiendo la información recabada por su servicio secreto para ayudar a mantener bajo control a Hamas y mantener la paz entre los dos países. Por tanto, no es de sorprenderse que tanto Washington como Jerusalén desearan tener un gobierno pro-occidental en Egipto en la era post-Mubarak. La cuestión es si después de la realización de elecciones libres y regulares que deben realizarse este año en Egipto, la posición pro-occidental y pro-israelí de Mubarak será conservada. La importancia estratégica de la Península del Sinaí, la cuestión palestina y la seguridad del transporte por el Canal de Suez, son todas cuestiones estratégicas sobre las cuales las elecciones egipcias tendrán grandes repercusiones.

Aparte de las causas de las revueltas populares mencionadas anteriormente, numerosos analistas señalan las consecuencias del post-colonialismo. Se señala que durante la era de la descolonización, las potencias coloniales establecieron entidades artificiales, creando fronteras sin tener prácticamente en cuenta las consideraciones étnicas, religiosas o tribales, perpetuando así el sistema occidental de dividir y reinar sobre el pueblo árabe, levantando unos contra otros las subculturas antagónicas. Como muchos de estos países son ricos en recursos naturales, la creación y apoyo a los regímenes dictatoriales serviles, corruptos y "cooperativos" era el medio de mantener la influencia de Occidente sobre los países árabes.

Las enseñanzas sacadas de los eventos

Como se ha explicado arriba, el empobrecimiento económico, el desempleo y la corrupción, son el origen de las insurrecciones que han sacudido a la región, sobre la base de reivindicaciones socio-económicas. Los datos disponibles y las reacciones de los gobernantes de la región dan un panorama de la amplitud de las desigualdades sociales existentes en esas sociedades. El resultado final de los cambios que la región está experimentando actualmente dependerá en gran parte de la capacidad de los nuevos poderes de modificar el sistema de redistribución de las riquezas, que ha sido el origen de las tensiones. Un nuevo sistema de redistribución y de creación de empleos es indispensable para una distribución más equitativa de los recursos nacionales. Este es un cambio absolutamente indispensable para solucionar los problemas cotidianos de pobreza, corrupción, acceso a la salud y a la educación, que engendran desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas y la propia democracia.

No existe ninguna duda de que este proceso de fortalecimiento de las naciones y de las instituciones tomará su tiempo. La experiencia de los países de Europa Central y del Este, región que tiene poca o ninguna experiencia democrática previa,

han mostrado que la edificación de la democracia es un proceso largo, en particular dado que las relaciones de poder en la sociedad están en movimiento perpetuo. En este punto, es esencial reformar la vida política. Es necesario remodelar en profundidad las Constituciones, los sistemas electorales, las leyes, los reglamentos y procedimientos que regulan los partidos políticos, el sistema jurídico, los medios, la participación de la sociedad civil, el establecimiento de órganos independientes de vigilancia de los poderes públicos, los sindicatos, etc. Más importante todavía, es necesario un cambio de mentalidad, incluyendo un cambio de paradigma en lo que concierne al lugar de las mujeres en la vida política de la región.

Las principales lecciones que podemos sacar de la Primavera Árabe son pues la necesidad urgente de mejorar la situación económica y las condiciones de vida de los ciudadanos, y la de emprender reformas democráticas inclusivas, esto es, basadas en la voluntad de los ciudadanos que se expresan por medio de elecciones libres y regulares. Además, un sistema democrático debe también respetar los derechos humanos y estar basado en un estado de derecho. Un sistema democrático es el más apropiado para la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades para todos y un trato igualitario para todos los sectores de la sociedad.

Otra lección adicional de las insurrecciones populares es que la paz y la seguridad regional no pueden ser aseguradas a la larga por regímenes que no sirven a los intereses de sus propios ciudadanos y nación, y que buscan apoyos externos para mantenerse en el poder. En una resolución adoptada por su 124ª Asamblea, en Panamá, en abril de 2011, la UIP afirmó a propósito de los países árabes que se sublevaron, “que estos pueblos y países tienen derecho de determinar su futuro político” y recordó “que las democracias deben reflejar la diversidad de historias y culturas”. Esto debe servir de lección para todos los defensores de la democracia: que siempre es el pueblo que tiene el derecho de determinar su propio futuro político en función de las particularidades culturales e históricas de su nación. Los poderes occidentales deben recordar esto cuando intenten influir en el resultado de las elecciones en la región.

Conclusión

Durante décadas, el Norte de África y el Medio Oriente han sido caracterizados por regímenes autoritarios encarnados por las dictaduras, las monarquías absolutas o las repúblicas clericales. El reinado prolongado de estos regímenes ha privado a los ciudadanos de participación en la vida política y suprimida toda opinión y pensamiento juzgado como oposición al gobernante en el poder. Los diferentes casos examinados en el presente informe han sacado a la luz las opiniones y pensamientos de los ciudadanos oprimidos anteriormente, probando así que la

opresión no puede indefinidamente garantizar la paz y la seguridad. Es solamente a través de una buena gobernanza y de la implementación de todos los principios expuestos en el presente informe que la paz y la seguridad pueden ser alcanzadas en una sociedad.